

El Proceso de Paz en Colombia: Misión de Verificación de la ONU

Por www.360geopolitica.org

El proceso de paz colombiano atraviesa un momento crucial mientras el presidente Gustavo Petro impulsa modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que ha generado un renovado escrutinio por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

Los cambios propuestos a la JEP podrían afectar directamente a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC, por sus siglas en inglés), cuya función es monitorear y verificar la implementación del acuerdo de paz. Esta interacción entre iniciativas de reforma interna y supervisión internacional subraya la complejidad y fragilidad del marco de justicia transicional del país. La agenda de "Paz Total" del gobierno Petro busca amplias reformas a la JEP, enfatizando rigor procesal y *mayor* participación.

Estas reformas exigirían que todas las personas vinculadas al conflicto armado –incluyendo combatientes, no combatientes y otros involucrados indirectamente– comparezcan ante la JEP con plenas garantías de debido proceso. El gobierno presenta estas reformas como esenciales para fortalecer la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y las medidas de no repetición, *integrando al mismo tiempo a ex grupos armados ilegales y otros actores criminales* en un marco integral de justicia transicional. Su implementación requeriría ajustes institucionales significativos y aprobación del Congreso, con un enfoque declarado en la protección de los derechos de las víctimas (La Silla Vacía).

El debate interno sobre estas reformas se ha intensificado. El expresidente Santos ha sostenido que la JEP ha *excedido* su mandato en el manejo de perpetradores de rango medio, reflejando la persistente tensión entre rendición de cuentas, administración de justicia y reconciliación nacional (Infobae).

A nivel internacional, los Estados miembros adoptaron posturas divergentes el 31 de octubre de 2025 en Nueva York. Rusia se abstuvo en la votación del CSNU para extender el mandato de la UNVMC, expresando preocupación de que reducir la supervisión sobre las decisiones de la JEP y las

protecciones étnicas podría socavar la credibilidad de la justicia transicional y disminuir las garantías para las víctimas.

Estados Unidos, por su parte, abogó por *enfocar* el mandato de la UNVMC, eliminando responsabilidades de verificación de decisiones de la JEP y monitoreo de derechos étnicos, condicionando su apoyo a mejoras *tangibles* en seguridad, reincorporación y presencia estatal en regiones históricamente disputadas. Tras la incorporación solo parcial de estas recomendaciones, EE. UU. se abstuvo en la votación.

La justificación del presidente Petro para buscar modificaciones a la JEP sigue siendo *insuficientemente* aclarada, a pesar de su centralidad en las presentaciones de su gobierno ante el CSNU. Su enfoque de "Paz Total", desarrollado durante su campaña presidencial y en conversaciones en la cárcel La Picota, contempla la incorporación de grupos armados ilegales y organizaciones criminales transnacionales de Colombia y Venezuela en acuerdos negociados. Bajo este marco, *estos actores mantienen capacidades operativas, influencia territorial y reciben distintos grados de protección legal*.

Desde el inicio de la presidencia de Petro, Colombia enfrenta crecientes desafíos de seguridad y gobernanza. *El país se ha convertido en el mayor productor y exportador de cocaína del mundo, mientras grupos armados ilegales y redes criminales controlan actualmente un estimado 75 % del territorio nacional*. Varias personas con antecedentes criminales han sido designadas como *gestores de paz*, obteniendo beneficios legales, incluido uno –alias Samir– responsable de la muerte de 13 militares (Infobae).

Estos hechos consolidan el poder de actores criminales, expanden el control territorial, intimidan a los opositores del gobierno e influyen en las dinámicas políticas de cara a las elecciones de 2026. La defensora del Pueblo presentó recientemente quejas formales solicitando la revisión de al menos cinco nombramientos de paramilitares como *gestores de paz* por insuficiente justificación legal (Blu Radio).

También han surgido denuncias sobre influencia financiera de actores ilícitos en la campaña de Petro, incluyendo aportes de disidencias de las FARC, potencialmente facilitados por la vicepresidenta Francia Márquez (Noticias Caracol).

Estos acontecimientos generan preocupación de que el marco de Paz Total *pueda permitir* que individuos *ofrezcan* testimonios contra opositores políticos mientras reciben protecciones legales, socavando así la integridad de la justicia transicional, debilitando los derechos de las víctimas y concentrando poder político bajo el argumento de implementar la paz.

La posición de Rusia se ha alineado estrechamente con la agenda de Petro, reflejando la llamada "Hermandad" entre Petro y Maduro (Infobae). El apoyo ruso en el CSNU ha amplificado las exigencias de Petro para modificar el mandato de la JEP en formas favorables a los participantes de Paz Total, mientras que, en el ámbito interno, medios alineados han replicado esta narrativa (El Espectador). Sin embargo, la abstención de Rusia en la reciente votación del CSNU sigue siendo ambigua, resaltando la complejidad geopolítica de su participación.

Por su parte, Estados Unidos ha mantenido una postura crítica frente al gobierno Petro, enfatizando la necesidad de que la UNVMC se *concentre* en objetivos claves en lugar de *expandirse* hacia asuntos políticos o de justicia transicional.

El CSNU extendió el mandato de la UNVMC por un año, enfocándose en tres áreas prioritarias: la reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP, las garantías de seguridad para excombatientes y comunidades vulnerables, y la reforma rural integral (Resolución 2805 (2025) del CSNU).

Esto asegura una misión manejable mientras mantiene el apoyo internacional al proceso de paz

colombiano, aunque con cautela respecto a vacíos en justicia y protecciones étnicas.

Internamente, la delegación colombiana ante la ONU quedó *marginada*. La *politización del proceso* por parte del presidente Petro, combinada con una estrategia pasiva de la misión, debilitó la influencia de Colombia en un momento diplomático decisivo. La delegación, compuesta por experimentados diplomáticos de carrera, no logró ejercer liderazgo ni defender prioridades nacionales, dejando *al país expuesto y apartado* en asuntos que afectan directamente la integridad de su proceso de paz.

La propia UNVMC ha sido criticada por falta de *firmeza*. Entre 2018 y 2022, la Misión a menudo pareció *replicar* mensajes políticos de la izquierda en el CSNU. Desde la presidencia de Petro, la Misión ha *evitado evaluar* el debilitado avance gubernamental en la implementación del acuerdo de paz, *contribuyendo* a percepciones de politización y pérdida de credibilidad. Las víctimas y la opinión pública colombiana han sido cada vez más relegadas, erosionando la confianza en la imparcialidad de la Misión y debilitando los objetivos del Acuerdo de Paz.

En conclusión, el proceso de paz de Colombia está en una encrucijada. Las modificaciones a la JEP, la influencia de grupos armados ilegales y del crimen organizado, y la politización de la verificación de la ONU amenazan la integridad de la justicia transicional y el objetivo más amplio de la reconciliación nacional.

Una UNVMC sólida e imparcial, junto con una gobernanza interna transparente y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, es esencial para salvaguardar los derechos de las víctimas, restaurar la confianza pública y asegurar un camino sostenible hacia la paz.

Bogotá, Colombia, 3 de diciembre de 2025.